

ABT revela que el desmonte legal es del 54% en Bolivia

Luego de cuatro años (2012-2015) en donde los desmontes ilegales dañaron el tejido forestal del país, hasta septiembre de 2016 los números giraron hacia la actividad legal. Así, según la Autoridad de Control y Fiscalización y Control Social Bosques y Tierra (ABT), hasta el tercer trimestre del año pasado se desmontaron en el país 141.292 hectáreas, de las cuales 76.301 (54%) fueron legales y 64.990 fueron ilegales.

Esta modificación no es una casualidad, pues de acuerdo con Álex Escalante, director nacional de programa Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, del 1,5 millones de hectáreas que se desmontaron en el país de manera ilegal, hasta febrero de 2017 regularizaron su situación el 85,6% (1.284.620 de hectáreas) lo que permitió un registro mayor de lo legal.

Otro punto, según el informe escrito de la ABT, que permitió un repunte de lo legal es que hay un aumento en la aprobación de los Planes de Ordenamiento Predial y en los Planes de Desmonte lo que provocó una menor burocracia e incentivó a los productores a optar por la actividad legal.

Sin embargo, se aclara en el documento de la ABT que fue entregado al senador Yerko Núñez, que entre 2012 y 2015 en el país se deforestaron 762.776 hectáreas de las cuales, 611.341 (80%) fueron realizadas de forma ilegal y solo 151.432 (20%) cumplieron con la norma vigente.

En 2012 se desmontaron ilegalmente 117.950 hectáreas, mientras que la legal llegó a las 10.094, en 2013 la actividad ilegal aumentó a 159.179 hectáreas y la legal sumó 21.011.

En 2014, nuevamente la deforestación ilegal aumentó a 179.818 hectáreas y a 35.259 la legal. Es en 2015 cuando la deforestación legal tiene un incremento de un 141% para pasar a 85.071 hectáreas, sin embargo la actividad ilegal sigue por encima con 155.396 hectáreas. Lo cierto es que antes de la modificatoria a la normativa imperaba lo ilegal.

Investigación de 2016

El senador Núñez explicó que el pedido de informe escrito a la ABT es el resultado de una investigación que empezó en 2016, debido a reiteradas denuncias de que en ciertas zonas de Santa Cruz, La Paz y Beni se estaban desarrollando desmontes ilegales para realizar labores agrícolas y pecuarias.

“Los resultados son sorprendentes porque vemos cómo la ilegalidad es una constante año tras año y triplica a la actividad legal. En esta coyuntura, es Santa Cruz la principal región afectada en donde los desmontes ilegales dan paso a la agricultura y la pecuaria no planificada”, dijo Núñez.

En este punto, los números de la ABT indican que en 2012 en Santa Cruz se desmontaron ilegalmente 91.369 hectáreas, en Beni, 8.437 y en La Paz, 4.032. En 2013 la ilegalidad en tierra cruceña se cobró 109.689 hectáreas, en Beni, 15.207 y en la sede de Gobierno, 7.263.

La tendencia al aumento de lo ilegal se registra en 2014 y 2015, mientras que hasta el tercer trimestre de 2016 nuevamente Santa Cruz, con 56.300 hectáreas, es la más afectada por las deforestaciones ilegales. Seguida bien de lejos por Beni con 5.364 y Pando con 2.929.

Críticas al actual escenario

Jorge Ávila, gerente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), indicó que la deforestación ilegal es el principal problema para la empresa maderera del país y para los bosques un cáncer que se debe combatir.

Ávila alertó que el 80% de las deforestaciones hasta 2015, sean ilegales es grave y es un síntoma de que la autoridad que controla estos ilícitos está ausente, a tiempo de detallar que cuando se deforesta se generan dos problemas, uno económico y el otro ecológico.

En el plano económico Ávila sostuvo que el desmonte ilegal deja en el camino materia prima que se pierde que bien puede ser transformada en un producto de consumo con valor agregado y por lo general esa materia prima se quema afectando al medioambiente.

Cuestión de alimentos

En el informe se detalla que de acuerdo con la Cobertura de Uso de Suelo (Cobuso), la categoría extractiva forestal (30.671 hectáreas), la productiva agropecuaria (21.733) y la productiva ganadera y extractiva forestal minera (21.330) son los que tienen mayor presencia en la deforestación ilegal.

Freddy Suárez, presidente de la CAO, sostuvo que en Santa Cruz hay cerca de tres millones de hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria y que si en gestiones pasadas hubo desmontes ilegales mediante un programa del Gobierno muchos productores optaron por legalizar su situación.

Suárez subrayó que la deforestación es un tema que preocupa al sector, pues si se quiere ampliar la frontera agrícola se la debe hacer de forma planificada y no con asentamientos ilegales que no respetan el uso de suelo y buscan realizar actividades agrícolas o trabajos pecuarios.

Productores inician siembra de trigo, girasol, sorgo y maíz

Los productores de la zona este del departamento, que comprende las jurisdicciones de Pailón, Cuatro Cañadas, San Julián, El Puente, Guarayos y San José de Chiquitos, empezaron hace 15 días la siembra de la temporada de invierno de trigo, maíz, girasol y de sorgo.

Haciendo alusión al dicho de que Santa Cruz es la ‘locomotora de la producción agropecuaria nacional’, el productor de San Julián Susano Terceros dijo que “se puso en marcha, aunque con retraso por las lluvias, la dinámica locomotora de la agricultura” del departamento.

Explicó que las constantes precipitaciones pluviales frenaron la recolección de los granos y que, por la misma razón, se atrasó la siembra de trigo, maíz, sorgo y girasol en esa parte del departamento. “Solo en sorgo se pudo iniciar el cultivo hace un mes, pues en la medida que se levanta la soya, se va rotando la plantación”.

Mientras esto ocurre en el extenso sector productivo del este cruceño, en el norte, que abarca las regiones Montero-Okinawa, Minero-Peta Grande y Montero-Yapacaní, se preparan para iniciar en un par de semanas la siembra de soya. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) estima que el cultivo del ‘grano de oro’ en esta zona llegará a 296.000 hectáreas, similar al de 2016.

La proyección de los cultivos de invierno, según datos de Anapo, está calculada en 746.000 hectáreas, con la soya y el frejol, que empezará este mes.

Adalid Rojas, responsable de la división semillas del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), que depende del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, indicó que la entidad cuenta con la cantidad suficiente de semillas certificadas para atender las demandas de los agricultores, excepto de frejol, porque el año pasado “casi fue un fracaso” la cosecha por la sequía, al punto que el cultivo solo fue de 15.000 hectáreas. “Pero ahora las perspectivas son favorables, porque la demanda permite ver que se calcula sembrar cerca de 40.000 hectáreas. Esto nos obliga a realizar un programa de emergencia para cubrir esa necesidad”, expresó.

Sugerencia del CIAT

El Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT), brazo operativo de la Gobernación en la investigación y mejoramiento de semillas, recomendó a los productores utilizar granos híbridos de maíz, de ciclos cortos a intermedio en la campaña de invierno.

El director del CIAT, Luis Ernesto Hurtado, explicó que los híbridos precoces son los que se cosechan a los 120 días de la siembra, y los de ciclo intermedio, a 140 días. “Esto permite aprovechar la menor cantidad de agua y da el espacio necesario para sembrar en la siguiente campaña, la de verano”.

Por otro lado, la autoridad sostuvo que en época de aguda sequía es muy difícil el control de los gusanos cogolleros, como ocurrió en 2016. “Frente a esto es importante hacer el tratamiento de las semillas y no aumentar el uso intensivo de agroquímicos”, concluyó.

Nuevo récord de cultivos genéticamente mejorados

Con poco más de 185 millones de hectáreas sembradas alrededor del mundo, los cultivos genéticamente mejorados registraron un nuevo récord en la gestión 2016 según el Informe Anual del Servicio Internacional de Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnología (Isaaa por su sigla en inglés), titulado Estado mundial de los cultivos transgénicos/genéticamente modificados (GM) comercializados en 2016. El documento da cuenta que la adopción de cultivos genéticamente mejorados aumentó unas 110 veces en apenas 21 años, subiendo de 1,7 millones de hectáreas cultivadas en 1996 hasta 185,1 millones de hectáreas en el 2016.

Al respecto, Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) celebró la noticia e indicó: “Sin duda, este hito productivo que es totalmente demostrable, echa por tierra la engañosa desinformación que ciertos activistas llevan a cabo oponiéndose al progreso de los agricultores; la agrobiotecnología y los alimentos genéticamente mejorados son sanos para su consumo y de alto beneficio para los productores”.